

FOCUS



Patricia Krause, economista
de Coface para América Latina
con sede en Sao Paulo, Brasil

Riesgo político en América Latina: ¿volver al futuro?

América Latina ha experimentado una etapa difícil desde 2014. El desplome de los precios de las materias primas ha afectado la actividad económica por varios canales (tales como inversiones e ingresos por exportaciones más bajos y restricciones del presupuesto público). Después de dos años de recesión (2015-2016), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la región finalmente repuntó en 2017 a una tasa estimada de 1.1% año-año. Se espera que adquiera mayor tracción en 2018 (el pronóstico de crecimiento es de 2.4% año-año). Sin embargo, esta mejor perspectiva se relaciona más con tendencias globales favorables que con méritos internos. A pesar de que un ciclo monetario restrictivo de ajuste gradual de las economías desarrolladas (especialmente en Estados Unidos), así como de una suave desaceleración de China y de una consecuente mejoría en los precios de las materias primas han ayudado a América Latina, el deteriorado ambiente político ha manchado la imagen de la región a los ojos de los muy necesarios inversionistas extranjeros, particularmente con los escándalos políticos y gubernamentales que han sido noticia en muchas ocasiones desde 2014.

El riesgo político siempre ha pesado negativamente en los pronósticos económicos de América Latina. La región tiene un notable historial de ser dirigida por sistemas políticos dictatoriales y gobiernos populistas, que han conducido a los países a experimentar episodios repetidos de hiperinflación y crisis de deuda pública en detrimento del desarrollo económico sostenible a largo plazo.

Aunque el terrorismo no es una de las preocupaciones principales para América Latina (con la excepción de México), al tiempo que las economías más grandes de la región están generalmente en menor riesgo a los conflictos, el riesgo político asociado con tensiones sociales es más alto. Los indicadores sociales deteriorados, resultados débiles de percepción de la corrupción y una relativamente alta tasa de homicidios, consecuencia de décadas de débil crecimiento e ineficientes políticas sociales y económicas que han creado altos niveles de desigualdad, afectan las perspectivas de la región.

En este contexto, el riesgo político continuará como una importante preocupación para América Latina en 2018. En medio de la insatisfacción general contra la clase política tradicional, varios países elegirán su nuevo presidente este año, lo que incluye a Colombia (mayo), México (julio) y Brasil (octubre). Por lo tanto, el riesgo de que las incertidumbres políticas afecten el ambiente económico aumenta, especialmente en Brasil y México.

El riesgo político en América Latina está relacionado principalmente con fragilidades sociales

El Modelo de Riesgo Político de Coface (Gráfica 1) toma en consideración varias medidas agrupadas en fragilidad política y social y riesgos de seguridad. Los países de América Latina generalmente se ubican alrededor de la media en el Modelo de Riesgo Político de Coface: a pesar de que sus calificaciones están impulsadas por bajos niveles de conflicto y terrorismo, los países están pobremente ubicados en lo que se refiere a fragilidades sociales y son relativamente vulnerables en lo que hace al riesgo social. Las variables macroeconómicas incluidas en el modelo (tales como PIB per cápita, tasa de desempleo, inflación y desigualdad del ingreso medido por el coeficiente de Gini) son normalmente puntos débiles para los países Latinoamericanos. El

GRÁFICA 1
Modelo de Riesgo Político de Coface



indicador de la presión social también toma en cuenta la tasa de homicidios, una medición de la corrupción como factor de presión, así como una variable que provee información de la capacidad de la población para expresarse. Al examinar a las más grandes economías de la región, solamente Chile mantiene un nivel de presión social por debajo del 45% promedio reportado por el Modelo de Riesgo de Coface (compuesto por 159 países). También vale la pena destacar que el resultado de los países se deterioró respecto de la lista de 2007 (Perú todavía es una excepción). Este fue particularmente el caso para México (castigado por sus índices de homicidio, libertad política y corrupción) y Brasil, que sintió el impacto de su peor recesión económica en sus indicadores sociales y que también observó un débil índice de corrupción. En lo que se refiere a conflictos, México tuvo el más pobre desempeño en la región, debido en gran medida a la creciente violencia de las guerras de pandillas en el país. México ha enfrentado años de violencia a medida que el Estado ha luchado contra los carteles de la droga que cada vez más se han dividido en bandas más pequeñas y sangrientas.

En 2017, la tasa de homicidios sobrepasó a la del año pico en la guerra del país contra las drogas que fue 2011. Entre tanto, Colombia ha observado una significativa mejoría. La violencia relacionada con las guerrillas ha caído considerablemente. A finales de 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz para concluir 50 años de conflicto. A pesar de las evidentes mejorías, todavía existen grupos disidentes en operación. Además, existe una significativa parte de la población que piensa que las condiciones del acuerdo fueron muy benévolas con los exguerrilleros.

La operación “Car Wash” ha afectado a muchos países latinoamericanos

La operación “Car Wash” empezó a principios de 2014 e inicialmente se enfocó en escándalos de corrupción que involucraban a Petrobras, la petrolera de propiedad estatal, así como a sobornos pagados por empresas de construcción a los ejecutivos de la compañía en compensación por contratos otorgados a precios inflados. La corrupción para beneficio personal y/o para el financiamiento ilegal de campañas ha abarcado a varios partidos políticos y más sorprendentemente se ha dispersado a otros gobiernos de América Latina.

Según varias investigaciones, para asegurarse el triunfo en proyectos de obra pública, entre 2001 y 2016, una importante empresa constructora de Brasil pagó alrededor de 788 millones de dólares americanos en sobornos en 11 países de la región además de Brasil. En Brasil, los ejecutivos de grandes empresas de la construcción así como políticos y varios partidos fueron implicados en casos de corrupción. Paralelamente, en agosto de 2016, la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) —militante del Partido del Trabajo (PT) de centro izquierda— fue acusada por manipular ilegalmente las cuentas de gobierno, pero es probable que el escándalo de la operación “Car Wash” ejerció presión indirectamente en el resultado del juicio de destitución. La presidenta fue reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, quien es muy impopular y quien también ha sido acusado de corrupción. Además, en la última etapa de la operación “Car Wash”, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue arrestado a principios de abril de 2018, después de ser sentenciado por corrupción y lavado de dinero. El expresidente argumenta que es víctima de una estrategia política para impedirle participar en las elecciones de este año. A media que la investigación continuaba, sus efectos empezaron a sentirse en los países vecinos. En diciembre de 2017, los tribunales de Ecuador sentenciaron al vicepresidente Jorge Glas, a seis años de prisión, después de encontrarlo culpable de recibir sobornos de la compañía brasileña de la construcción a cambio de otorgarle contratos del gobierno. En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) entregó su renuncia el 21 de abril de 2018, a partir del descubrimiento de nueva evidencia de corrupción relacionada con el grupo constructor brasileño. Este movimiento vino un día antes de una segunda votación para su destitución en tres meses.

La operación “Car Wash” se extendió a Argentina, cuando la constructora brasileña admitió haber pagado 35 millones de dólares en sobornos para contratos durante la presidencia de Cristina Kirchner (2007-2015), del frente de centro izquierda Unidad Ciudadana. Más recientemente, un alto funcionario del servicio de inteligencia, Gustavo Arribas (un cercano del actual presidente Mauricio Macri) también comenzó a ser investigado. Se ha mencionado que recibió 850,000 dólares americanos de una compañía fachada investigada como parte de la operación “Car Wash”. Arribas es el primer alto funcionario del gobierno de Macri en ser denunciado en la investigación por corrupción.

En lo que se refiere a México, las sospechas de corrupción vienen de la campaña de 2012 del presidente Enrique Peña Nieto, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por recursos pagados a exfuncionarios de la compañía petrolera de propiedad estatal Pemex. En 2017, la constructora brasileña fue inhabilitada por la sentencia de un juzgado mexicano para participar en licitaciones en el país durante cuatro años. Además, en abril de 2018, el gobierno también prohibió a instituciones federales y a los gobiernos estatales hacer negocios con la firma brasileña durante dos años y medio y aplicó a la compañía una multa de aproximadamente 60 millones de dólares. Además del escándalo de Pemex, otros casos de corrupción serios contribuyeron a disminuir la popularidad del gobierno mexicano.

En Colombia, un exviceministro de Transporte y un exsenador del Partido Liberal (hasta 2002) han sido arrestados como resultado de la operación “Car Wash”. En marzo de 2017, el presidente Juan Manuel Santos se disculpó por usar fondos ilegales para financiar su campaña electoral, pero negó haber sabido que la constructora brasileña donara 1 millón de dólares americanos para sufragar su campaña. Incluso Chile, que generalmente reporta los mejores índices de corrupción en la región, no ha sido inmune

a estos escándalos: durante su segundo mandato, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018, miembro del Partido Socialista), fue sacudida por escándalos de corrupción que involucraban a sus más cercanos parientes. Además, el actual presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018 al presente, miembro del centro-derechista Partido Renovación Nacional) enfrentó señalamientos sobre pagos irregulares entregados por una empresa minera a su primera campaña presidencial en 2009. El grave problema de corrupción, con numerosos escándalos en la historia reciente, fácilmente explica por qué las economías de América Latina se desempeñan pobremente cuando se trata de percepción de la corrupción. Con excepción de Chile, las economías más grandes califican bajo en el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional (gráfica 2). En comparación, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (con excepción de México y Chile) presentaron un resultado promedio de 70 puntos en 2017.

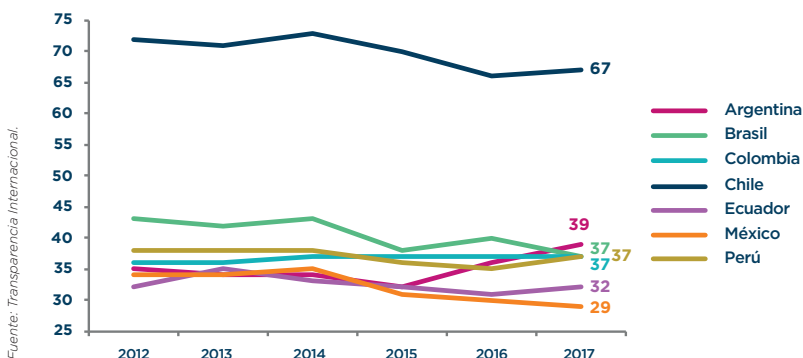
El índice clasifica 181 países y territorios por sus niveles percibidos de corrupción del sector público conforme a expertos y gente de negocios. La escala es 0-100, de lo que se desprende que 0 representa una percepción de alto nivel de corrupción y 100 una percepción de bajo de nivel.

México y Brasil: dos factores de riesgo político por venir

El año 2018 tiene el potencial de ser un cambio de juego para muchos países en la región, con muchas elecciones presidenciales que se realizarán. La primera prueba tendrá lugar en Colombia en mayo. El escenario parece menos riesgoso debido a los perfiles de los candidatos, ninguno de los cuales pertenece a un partido extremista declarado y ninguno de los cuales es un candidato independiente polémico con altas oportunidades de ganar. Mientras tanto, las FARC se convirtieron en un partido político, pero fallaron en conseguir apoyo para su agenda radical. Por lo tanto, el grupo solo tendrá 10 asientos garantizados bajo el acuerdo de paz de 2016. Iván Duque, el candidato respaldado por el expresidente Álvaro Uribe, encabeza las encuestas. Es probable que Duque enfrente a Petro en una segunda vuelta el 17 de junio.

Las elecciones de México están programadas para el 1 de julio de 2018. Básicamente el país solo ha sido gobernado por uno de dos partidos. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantuvo en el poder por siete décadas hasta el año 2000, cuando el centroderechista Partido Acción Nacional (PAN) ganó la carrera electoral. Este último partido gobernó al país 12 años, hasta que Peña Nieto tomó posesión en 2012. Sin embargo, esta tradición bipartidista puede que se rompa este año: la escalada de violencia en el país y una insatisfacción general con la clase política tradicional pesan en esta competencia electoral. Actualmente, el candidato antisistema Andrés Manuel López Obrador (mejor conocido como AMLO) encabeza las encuestas por un amplio margen. Este es su tercer intento de ser presidente. Conforme a las encuestas de Parametría, de principios de abril de 2018, AMLO tenía 38% de la intención de voto, seguido por Ricardo Anaya, del PAN (20%), y José Antonio Meade, del PRI (16%). No obstante, en las últimas semanas, las oportunidades de Anaya han disminuido, ya que ha sido acusado de lavado de dinero, mientras que Meade carga la imagen negativa del PRI. Además, ya que las elecciones de México consisten en una sola ronda de votaciones, un candidato puede ganar con un respaldo relativamente débil. Con la intención de atraer a los votantes desalentados, AMLO ha prometido

GRÁFICA 2
Índice de Percepción de la Corrupción 2017



enfrentar a la corrupción y restaurar la seguridad. Aunque, históricamente él se ha manifestado en contra de la inversión privada en industrias tradicionalmente dirigidas por el Estado (por ejemplo la reforma energética de 2013), recientemente el candidato ha suavizado su retórica y ha adoptado un discurso más moderado. A principios de abril de 2018, él emitió una carta en la cual prometió adoptar una política económica responsable y respetar el estado de derecho y la propiedad privada. También ha prometido no dar marcha atrás a la reforma energética y ha dicho que trabajará con el sector privado en proyectos de infraestructura. Sin embargo, una potencial administración de AMLO enfrentará desafíos. La divergencia ideológica entre sus aliados políticos puede obstaculizar la habilidad para construir una fuerte coalición y el apoyo del Congreso. Si él gana, es probable que haya cierta volatilidad cambiaria y un impacto negativo de corto plazo en la confianza empresarial.

En Brasil, la primera ronda de las elecciones presidenciales se realizará el 7 de octubre. Las pasadas seis elecciones fueron dominadas por el PT y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), este último el partido que gobernó al país de 1995 a 2002 con Fernando Henrique Cardoso. Paradójicamente, el favorito hasta hace poco ha sido el expresidente Lula, quien fue condenado por lavado de dinero y corrupción pasiva en julio de 2017. Desde el 7 de abril de 2018 comenzó a cumplir su sentencia de 12 años. La fuerte popularidad que todavía tiene Lula en una parte de la población puede atribuirse a la prosperidad económica que los brasileños comunes experimentaron durante su mandato. Probablemente él no estará en posibilidades de postularse, ya que bajo la ley electoral del país, un candidato tiene prohibido competir para un puesto de elección popular durante ocho años después de haber sido encontrado culpable de un crimen. En medio de esa batalla judicial, existe un controvertido candidato con altas probabilidades de aprovechar este momento. Jair Bolsonaro es un exoficial militar, que ha sido miembro de la Cámara de Diputados desde 1991 y que fue el congresista más votado en el estado de Río de Janeiro en 2014. Descrito en los medios de comunicación como antigay y proclive a las armas, la carrera política de Bolsonaro está marcada por un sesgo estatista. Sin embargo, ahora él dice que dejará las decisiones económicas a Paulo Guedes (su posible ministro de Finanzas), cuyas ideas son conocidas y respetadas en los mercados, tanto en Brasil como internacionalmente. Sin embargo, si Bolsonaro es electo, no esperamos que su candidato para el cargo de ministro de Finanzas tenga suficiente autonomía para conducir una agenda económica proempresarial. Actualmente las encuestas muestran a Bolsonaro compitiendo en el segundo lugar en una simulación que considera a Lula como candidato. Sin embargo, en un escenario sin el expresidente Lula, Bolsonaro aparece como el favorito en todas las simulaciones. Todavía no conocemos el nombre de los contendientes centristas; el ministro

de Finanzas de Brasil, Henrique Meirelles, renunció a principios de abril de 2018 en aras de prepararse para postularse para las elecciones por el partido gobernante Partido del Movimiento Democrático de Brasil (MDB). Su decisión final dependerá de si el presidente Michel Temer resuelve competir. Otros posibles candidatos centristas son el exministro y expresidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil (la Suprema Corte), Joaquim Barbosa, que se unió al centroizquierdista Partido Socialista Brasileño (PSB) en abril de 2018, considerando una postulación presidencial en las elecciones de octubre. Llegó a ser bien conocido por la población en general cuando fue ponente en el escándalo político mensalão de 2006. Además, Geraldo Alckmin del PSDB renunció a la gubernatura de Sao Paulo también apuntando hacia la carrera presidencial. Se espera que este último, si es electo, avance en la agenda proempresarial del presidente Temer. Definitivamente, la próxima administración necesita aprobar una reforma fiscal para estabilizar las métricas de deuda hacia mediano plazo.

El efecto de la debilidad política sobre la actividad económica

Este renovado riesgo político ya ha tenido algún impacto sobre el crecimiento de la región. Por ejemplo, los efectos secundarios de la operación “Car Wash” han contribuido claramente a profundizar la recesión (el PIB se contrajo 7% entre 2015 y 2016). Algunos grupos constructores

involucrados en el escándalo fueron obligados a solicitar la protección del Capítulo XI, mientras que otras compañías que tenían sus negocios altamente dependientes de Petrobras también fueron fuertemente golpeadas.

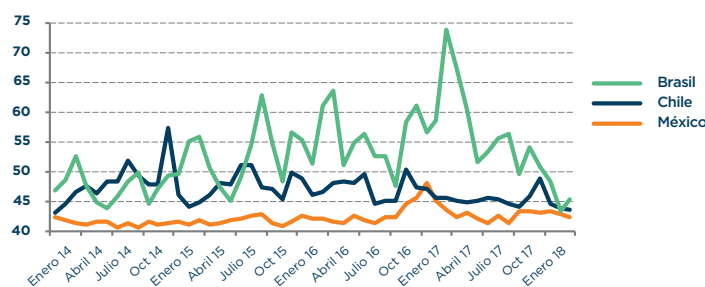
Otro ejemplo es el PIB de Perú. El crecimiento de la economía cayó a 2.5% en 2017, por debajo del 4% de 2016. Al tiempo que las malas condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno climático del Niño jugaron un papel importante en el pobre desempeño económico del país, la operación “Car Wash” también fue decisiva. En México, las incertidumbres relacionadas con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las próximas elecciones presidenciales también han afectado la actividad (principalmente a través de la reducción de inversiones). De hecho, el crecimiento económico y el riesgo político están interconectados. Un creciente riesgo político puede afectar el panorama económico. El impacto de esta incertidumbre política en el crecimiento involucra principalmente dos canales de transmisión que parecen apoyarse mutuamente:

1. Una caída en los mercados de renta variable y un incremento en las tasas de los bonos que afectan negativamente las condiciones de financiamiento para los agentes económicos (Estado, empresas y hogares) y por tanto su panorama de inversión y gasto y
2. Un menor nivel de confianza corporativa y de los hogares provocando demoras o cancelaciones en las decisiones de gasto o inversión.

Si estos canales duran por un tiempo, un tercer canal también puede ocurrir: el de las políticas presupuestarias. En el caso de un vacío gubernamental de largo plazo, el congelamiento del gasto público causa un efecto negativo en la economía. Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que cubre una muestra de 169 países, encontró que mayores grados de inestabilidad política están asociados con bajas tasas de crecimiento del PIB per cápita. Respecto los canales de transmisión, el estudio encontró que la inestabilidad política afecta adversamente el crecimiento al bajar las tasas de crecimiento de la productividad y en menor grado la acumulación de capital humano y físico. Además, según un estudio del Banco Mundial (BM) sobre las implicaciones de la creciente incertidumbre para las inversiones en los mercados emergentes y economías en desarrollo desde la crisis de 2008-2009, la alta incertidumbre en la política interna afecta negativamente las tasas de inversión: un aumento de 10% en la incertidumbre política de Brasil (capturado por el índice EPU) reduce el crecimiento de la inversión en aproximadamente 0.8 puntos porcentuales en un año.

En América Latina, el índice EPU cubre las economías de Brasil, Chile y México (**gráfica 3**). El índice mejoró en estos tres países, cuando se compara con el mismo periodo del 2017. En Chile el más reciente pico negativo, fue alcanzado en diciembre 2017, al mismo tiempo que corría la elección presidencial. Sin embargo, la incertidumbre se redujo desde que el candidato pro negocios Sebastián Piñera fue electo. En México, este índice ha alcanzado su nivel más alto en enero de 2017, cuando Donald Trump tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Desde entonces el índice ha mejorado, aún con el actual contexto que el candidato anti sistema, AMLO encabeza las preferencias. Curiosamente en Brasil el punto más alto fue alcanzado en marzo 2017, desatado por el escándalo “Tainted-Meats” y no por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en agosto 2016, como se hubiera esperado.

GRÁFICA 3
Índice de Incertidumbre de Política Económica



- 2 - Aisen, A. & Veiga, F.J. 2011. FMI Cuaderno de trabajo. ¿Cómo la inestabilidad política afecta el crecimiento económico?, Washington, DC: Fondo Monetario Internacional.
- 3 - Grupo Banco Mundial, 2017. Prospectos de la Economía Global, enero 2017: Débil inversión en tiempos de incertidumbre. Washington, DC: Banco Mundial.
- 4 - Índice de Incertidumbre de Política Económica (índice EPU): es una medición sustentada en noticias para capturar la incertidumbre relacionada con la política, desarrollado por Bloom, Banker y Davis (2016).

RESERVA

El presente documento es un resumen que refleja las opiniones y puntos de vista de participantes según como Coface lo interpreta y acota en la fecha en que fue escrito y basada en la información disponible. Puede ser modificada en cualquier momento. Sin embargo, Coface no garantiza, bajo ninguna circunstancia, la exactitud, integridad o realidad de los datos contenidos en ella. La información, análisis y opiniones son brindadas por motivos informativos y son solo un suplemento de la información que el lector puede encontrar en otra fuente. Coface no tiene obligaciones de contratación sino obligación de medios y no se responsabiliza por las pérdidas en que incurra el lector que surjan del uso de la información, análisis y opiniones contenidas en el presente documento. Este documento y los análisis y opiniones expresadas en el mismo son exclusividad única de Coface. El lector puede revisarlos o reproducirlos solo para uso interno, sujeto a mencionar claramente el nombre de Coface y sin alterar o modificar los datos. Está prohibido todo uso, extracción, reproducción para el público o uso comercial sin el consentimiento previo de Coface. Sírvase consultar el aviso legal en la página web de Coface.

COFACE SA

1, place Costes et Bellonte
92270 Bois-Colombes
France

www.coface.com